

Para la niñez no ha dejado de temblar

Al cumplirse un mes del terremoto, la coalición NiñezYA preparó este informe para llamar la atención sobre el imperioso deber de poner a la niñez en el centro de las decisiones y en ellas tener en cuenta los riesgos latentes para esta población. Recuerda que en varios de los territorios afectados, niñas, niños y adolescentes ya enfrentaban situaciones de violencia, desplazamiento, riesgos de protección o afectaciones climáticas, con lo cual el sismo multiplicó su vulnerabilidad.

El 10 de agosto y días posteriores las imágenes estaban en redes sociales, noticieros de televisión, portadas de los periódicos colombianos y de otras partes del mundo. El terremoto en Colombia era noticia. Pacientes pediátricos, entre ellos recién nacidos, iban en brazos de las enfermeras por las calles de Cali; estudiantes de un colegio de Risaralda huían de los pedazos del techo que caían sobre sus cabezas; en Quibdó, cinco hermanos lloraban la muerte de su madre y lamentaban su situación de orfandad...

A un mes del fuerte sismo que sacudió 16 departamentos en 498 municipios con una afectación a 296.738 familias, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las imágenes son otras y tan o más impactantes: niñas y niños viviendo en albergues acondicionados en estadios, zonas sociales, salones comunitarios y parques o viviendo en casas de vecinos o familiares separados de sus familias; pequeños llorando porque se alteran al escuchar una alarma; niñas y niños al cuidado de extraños, mientras sus padres buscan el sustento diario o pintando sobre el suelo en espacios improvisados como aulas escolares; juguetes olvidados entre escombros que recorren los adultos tratando de salvar algo de su vida anterior.

“La emergencia está lejos de terminar para muchas familias en Colombia, por supuesto, también para muchos niños y niñas, que tienen riesgos asociados a la emergencia, en términos de separación familiar; abuso sexual o violencia sexual producto de vivir en albergues informales, en condiciones de hacinamiento, sin ninguna protección, e interrupción de acceso a servicios básicos como educación y salud. Hemos visto niños y niñas que han cambiado su comportamiento, que están asumiendo un rol protector sobre sus padres porque absorben su angustia de resolver en el día a día dónde dormir y qué comer”, cuenta María Mercedes Liévano, directora de Save The Children en Colombia.

“La protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad durante todas las etapas de la emergencia y la reconstrucción. Una emergencia de esta magnitud no solo deja pérdidas humanas y materiales: también debilita los entornos que protegen a la niñez —sus familias, escuelas, comunidades y redes de apoyo— y puede aumentar su exposición a la violencia, la explotación, la trata, el reclutamiento y otras vulneraciones. Por ello, la respuesta no puede limitarse a atender las necesidades inmediatas; debe garantizar de manera integral y sostenida sus derechos y reconstruir los entornos protectores que les permiten recuperar sus vínculos, sus rutinas y sus proyectos de vida”, señala Esteban Reyes, director de Aldeas SOS.

Precisamente, las instituciones educativas son uno de esos entornos protectores. Según el Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación, 6.036 sedes han resultado afectadas, lo que implica 1.269.154 estudiantes, 59.993 docentes y 4.129 directivos docentes. La interrupción de la educación, como lo demostró de manera reciente la pandemia, tiene riesgos asociados. Entre más tiempo permanecen los estudiantes fuera de un espacio educativo estructurado, mayores son las pérdidas de aprendizaje y es más alto el peligro de la deserción y la vinculación a grupos al margen de la ley.

La pandemia también mostró que la respuesta no puede ser virtualidad y que deben diseñarse acciones que tengan en cuenta las condiciones de la zona (rural o urbana), así como las de infraestructura, conectividad, electricidad, dispositivos y acompañamiento psicoemocional y familiar. “Cualquier estrategia para mantener la trayectoria educativa debe partir de un diagnóstico diferenciado por territorio e institución, no de una fórmula única aplicada a todo el sistema”, señala la Fundación.

Victoria Arciniegas, directora de aeioTU, llama la atención sobre la urgencia de pensar en la educación inicial en esa trayectoria educativa, donde se tiene el reto de recopilar la información de las afectaciones para activar los servicios lo antes posible e impedir el aumento de la vulneración de derechos. “Cuando se interrumpe un servicio de primera infancia se rompe una red de protección que sostiene el cuidado, la alimentación, la salud, el juego, las rutinas, los vínculos y el bienestar emocional”, señala.

El mayor desafío está en la modalidad comunitaria, que es en la que familias y comunidades son protagonistas activos. Se implementa en zonas urbanas y rurales, a través de espacios como viviendas de madres y padres comunitarios, sedes comunitarias o lugares acordados con las familias.

Protección integral, una prioridad

En las instituciones educativas además de contar con las enseñanzas y el acompañamiento de sus docentes, niñas, niños y adolescentes cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hoy no se está dando en todos los territorios debido a las condiciones de los comedores escolares, lo cual indica un riesgo para su nutrición. A ello se agrega una situación sobre la que alerta el médico Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco): “muchas familias no tienen acceso a agua y tienen que recurrir a otras fuentes y tampoco tienen acceso al saneamiento básico, esto hace que a los niños se les inflame el intestino por los diferentes, digamos, microorganismos, lo que se conoce como disfunción entérica ambiental. El intestino inflamado no absorbe todos los nutrientes y si además ese niño no tiene acceso a los alimentos, pues tenemos una tragedia porque aumenta la desnutrición”.

Buitrago señala que a una persona comer de manera óptima en Colombia durante un mes, en promedio, le cuesta 613.000 pesos, pero en este momento 14 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, las cuales solo pueden invertir apenas 184.000 pesos al mes para comer y 4,9 millones de personas que viven por debajo de la línea pobreza extrema solo llegan a 90.000 pesos al mes. “Entre las 290.000 familias damnificadas por el terremoto hay decenas de miles que viven por debajo de la línea de pobreza y miles que viven por debajo de

la línea de pobreza extrema, ahora tienen otras preocupaciones económicas y los poquitos recursos que tenían para comer son mucho menos. Entonces los niños se van a alimentar mucho peor”, afirma.

Diferentes documentos elaborados por World Vision después de emergencias similares a la vivida en Colombia o la propiciada por la pandemia por covid-19 señalan que la falta de un salario o sustento diario en una familia es un riesgo para la protección de la niñez. “La pérdida de medios de vida de madres y padres suele preceder a mecanismos de supervivencia negativos, como la mendicidad y el trabajo infantil. Si no se toman acciones inmediatas para proteger los medios de sustento de las personas, el impacto revertirá el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dañará irreparablemente la vida de las generaciones actuales y futuras de niñas, niños y adolescentes. Los más afectados serán aquellos que dependan de la ganancia diaria, que necesitan el acceso a economías informales o que dependan del dinero en efectivo/cupones y distribuciones de alimentos en especie por parte de las agencias de ayuda y los gobiernos”, sintetiza la organización.

Paola A. Lasso, directora de Respuesta al Terremoto de World Vision, agrega que se debe tener especial atención con el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes debido a que las zonas afectadas por el terremoto son de influencia del conflicto armado, una condición que superpuesta a la emergencia exacerba las dificultades económicas de los hogares y propicia la vinculación de los menores de edad a los grupos delictuales.

Danitza Marentes, directora general de Valientes Colombia, además advierte que la alta vulnerabilidad de las personas al perderlo todo y el caos que genera una emergencia es aprovechado por redes criminales para la captación, el traslado irregular y la trata de personas. “Se valen de falsas ofertas de ayuda, transporte, alojamiento, comida o empleo para captar víctimas. Un depredador no siempre luce sospechoso; suele acercarse ofreciendo colaboración o presentándose como voluntario”, dice.

Como bien señalan las organizaciones de **NiñezYA**, el principal riesgo después del terremoto es tratarlo como una emergencia aislada y pensar que termina cuando deja de temblar. En muchos de los territorios afectados, las niñas, los niños y los adolescentes ya enfrentaban situaciones de violencia, desplazamiento, riesgos de protección o afectaciones climáticas. El sismo se superpuso a esas realidades y multiplicó su vulnerabilidad.

Para reducir los riesgos señalados, se requiere restablecer cuanto antes espacios seguros de cuidado y garantizar la continuidad de las atenciones a la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Asegurarse de que las familias tengan apoyo económico, psicosocial y de salud mental y priorizar comunidades en zonas rurales y remotas como comunidades indígenas y afrocolombianas.

“En particular, debemos garantizar el derecho de cada niña y niño a crecer y permanecer en familia. La pérdida de una vivienda, de los medios de subsistencia o de las condiciones materiales para cuidar nunca debe convertirse en una causa de separación familiar. La

prioridad debe ser fortalecer a las familias para que puedan continuar cuidando, prevenir separaciones innecesarias y, cuando estas ocurran, actuar rápidamente para lograr una reunificación segura; cuando esto no sea posible de manera inmediata, deben privilegiarse alternativas de cuidado familiar y la preservación de los vínculos afectivos. La reconstrucción será verdaderamente una recuperación para la niñez cuando, además de reconstruir infraestructura, logremos que niñas y niños estén protegidos, acompañados y puedan seguir creciendo junto a sus familias y comunidades”, insiste Reyes.

La recuperación debe partir del interés superior de la niñez y de una acción articulada entre familias, comunidades, sectores público y privado, gobiernos locales y nacional. No se trata únicamente de reconstruir lo que el terremoto destruyó, sino de fortalecer las condiciones que protegen el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y construir sistemas de primera infancia, infancia y adolescencia capaces de sostener el cuidado incluso en contextos de crisis. Porque, aun en una emergencia, los derechos de la niñez y la adolescencia no se suspenden.

Más información sobre acciones para la garantía de los derechos en: <https://cutt.ly/gylWl60l>